



REPÚBLICA DE AUSTRIA
TRIBUNAL REGIONAL DE DERECHO CIVIL DE GRAZ

3 R 174/21 m

8010 Graz
Marburger Kai 49

EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA

El Tribunal Regional de Asuntos Civiles de Graz tiene como tribunal de apelación:

Juez Hofrat Mag. Wlattnig (presidente), Mag. Scheuerer y el Dr. Meier en el

Caso del demandante

[REDACTED], representada por el Mag. Dr. Josef F. [REDACTED], abogado en Viena,
contra la demandada Lyonesse Europe AG, CH - 9470 Buchs, Bahnhofstraße 22,
Suiza, representada por Reif and Partner Attorneys at Law OG en Graz, por
3.575,16 euros, incluido el anexo, en el recurso de casación del demandado
(Objeto: 1.050,00 euros) contra la sentencia del Tribunal de Distrito
Weiz de 28.05.2021, 42 C 192/20f - 20, en sesión a puerta cerrada con razón
conocido:

No se admitirá el recurso .

El demandado está obligado a pagar al demandante en el plazo de 14 días la cantidad de 480,00 euros (IVA incluido:
81,51 [REDACTED]) para reembolsar los costes del procedimiento de apelación.

En cualquier caso, no es admisible un recurso contra esta decisión (§§ 502 párrafo 2,
519 ZPO).

RAZONES DE LA DECISIÓN:

El Tribunal de Apelación considera que los argumentos del recurso de apelación son infundados,
Sin embargo, los fundamentos controvertidos de la sentencia recurrida son:
correcto; por lo tanto, el Tribunal de Apelación puede, con referencia a la corrección de la

motivos controvertidos de la decisión con una breve justificación de su valoración estar satisfecho (§ 500a ZPO).

La repetición de las extensas alegaciones de las partes en primera instancia, así como las conclusiones (posiciones no controvertidas) y la valoración jurídica en Por esta razón la sentencia impugnada es innecesaria.

En la sentencia recurrida, el tribunal de primera instancia desestimó las excepciones procesales a) de la Falta de jurisdicción internacional y local del Tribunal de Distrito de Weiz y b) la inadmisibilidad del proceso legal y la concesión de la acción. En la sentencia, Páginas 10 a 13, sus conclusiones parcialmente impugnadas, a las que se hizo referencia para evitar Se hace referencia inicialmente a las repeticiones.

El tribunal de primera instancia afirmó su jurisdicción internacional con la Razonamiento resumido de que el demandado no ha podido demostrar que El demandante había acordado un lugar de jurisdicción exclusivo (Buchs en Suiza), En cuanto a la cláusula arbitral reclamada por la demandada, En lo que respecta al consumidor, el demandado no pudo demostrar que hubiera acordado esta cláusula con el demandante. Además, el demandante es un consumidor y, por lo tanto, se le aplica la jurisdicción en materia de consumo prevista en el artículo 16, apartado 1, de la LGVÜ.

La cláusula de arbitraje contenida en el acuerdo de 2014 también está de conformidad con el artículo 879 párrafo 3.

En cualquier caso, la ABGB es sumamente discriminatoria, indefinida y confusa, por lo que...

Incluso si así se hubiera convenido entre las partes, sería nulo.

Además, una cláusula de arbitraje obligatorio sólo conduciría al rechazo del contrato.

Por tanto, las defensas procesales de la el acusado será desestimado.

En el caso, el tribunal de primera instancia se refirió a las decisiones del Tribunal Supremo.

4 Ob 10/19b y 9 Ob 40/18z, según los cuales el modelo de negocio del demandado ya en varias decisiones de la Corte Suprema como un esquema piramidal prohibido en el sentido del apartado 14 del anexo del § 12 de la Ley alemana sobre competencia desleal (UWG).

Los "cupones" a "cupones de descuento" o "cupones" se evaluarían como esquema piramidal prohibido; el modelo de negocio del acusado es

Por lo tanto, la relación contractual entre las partes en la controversia era

El § 879, párrafo 1 del ABGB, en conjunción con el § 2 UWG, apéndice Z 14, es nulo. Según el § 877 del ABGB,

El demandado los pagos anticipados hechos por el demandante menos los pagos y para reembolsar las nuevas reservas.

(Únicamente) contra el pago de 1.050,00 EUR más intereses, la garantía por defectos,
El recurso de casación del demandado , en el que se exponen las objeciones de hecho y de derecho ,
enmienda del impugnado juicio allá solicitado, su
Conceder la excepción de falta de jurisdicción por importe de 1.050,00 euros más intereses y
Se debe rechazar la reclamación por esta cantidad; alternatively, la enmienda
solicita que se desestime la demanda por importe de 1.050,00 euros más intereses por falta de
Se desestime o rechace la acción; alternatively, la acción impugnada
La sentencia debe modificarse para incluir la reclamación adicional de 1.050,00 euros incluido el apéndice
rechazar.

Por lo tanto, el recurso de casación del demandado permite obtener una indemnización de 2.525,75 euros, incluidos
Interés no cuestionado, lo cual (junto con el rechazo de las defensas procesales en
(en esta medida) se volvió legalmente vinculante por este motivo.

En su contestación, el demandante solicita que se desestime el recurso.
dar.

El recurso, que se resolverá a puerta cerrada de conformidad con el artículo 480, apartado 1, del Código de Procedimiento Civil,
Podría decidirse que no está justificado.

1.1 La queja se refiere a la decisión sobre la defensa procesal de la falta de
jurisdicción internacional y que en el asunto. El acusado está desaparecido
el interrogatorio del testigo Christopher, que ella había solicitado sobre ambas cuestiones
Thomson, por lo que según sus afirmaciones hay deficiencias en la recopilación de material relevante
(§ 496 ZPO) estaría presente.

1.2. La deficiencia alegada en el procedimiento de primera instancia no existe:

El demandado ignora su propia disposición procesal, según la cual
Audiencia oral del 07.04.2021 sobre el interrogatorio del director general
El acusado, Christopher Thomson, ante el Tribunal de Distrito de Weiz expresamente
y aceptó que su declaración se leyera en un juicio paralelo
de acuerdo (ON 18, pág. 3). El acta de su interrogatorio fue
presentada y leída por el acusado en esta audiencia como Anexo ./16,
de manera que no sea evidente el supuesto error del tribunal.

2.1. La queja fáctica se refiere también a la decisión sobre la competencia y a aquellas
En el asunto. El demandado impugna las decisiones tomadas en la sentencia, página 12.

Hallazgos negativos, según los cuales (en resumen)

No se pudo establecer que el demandante tuviera un acuerdo de jurisdicción con el
No se había acordado un arbitraje ante un tribunal suizo ni una cláusula de arbitraje, ni que el demandante
el Acuerdo Lyconet 2014, incluido el acuerdo de jurisdicción contenido en el mismo con el
Demandado; tampoco se pudo establecer que el demandante acordó con el demandado términos y
condiciones adicionales para los vales de descuento o se sometió a una cláusula de arbitraje obligatorio
con el demandado.

La queja del demandado se basa en que todos los
supuestos acuerdos con el demandante conclusiones positivas de hechos
ser tomado

2.2 La queja de hecho no tiene trascendencia jurídica porque, aun cuando
los puntos mencionados (acuerdo sobre jurisdicción; acuerdo sobre un
Cláusula arbitral, acuerdo del Acuerdo Lyconet 2014) positivo

Si los hechos se establecieran de conformidad con las alegaciones del acusado, no habría
cambio en la valoración jurídica por diversas razones, tanto en
la decisión sobre las defensas procesales (véase más adelante), así como sobre el fondo
En sí (véase el punto 3) se produciría:

(a) Como ya lo ha señalado la Sala de Apelaciones en el caso del demandado
varias veces (incluida hg 3 R 212/20y) la afirmación o negación de la
La jurisdicción internacional del consumo y, por tanto, la cuestión de la jurisdicción del
El tribunal que conoce del asunto también depende de si el demandante, al celebrar el contrato con
El demandado debe ser considerado un consumidor o un empresario. Esto
Sin embargo, según la declaración de demanda, esta propiedad también se aplica a la reivindicación.
Reclamación jurídica sustancial. De conformidad con el derecho europeo,
La Corte Suprema tiene la opinión jurídica establecida de que en este caso el examen de la
jurisdicción, la coherencia de la alegación debe ser suficiente para establecer
El examen no debe verse cargado con un examen fáctico extenso (RS0116404).
Por lo tanto, la jurisdicción del tribunal que conoce de estos llamados
hechos doblemente relevantes, una comprobación de plausibilidad de la
argumentos del demandante para no iniciar ya la revisión jurisdiccional con una
Esto es necesario porque la jurisdicción es independiente de
el fondo de la reclamación, que deberá examinarse previamente en el propio procedimiento,
debe poder ser (por ejemplo, 6 Ob 128/18v con referencias adicionales de la literatura y la jurisprudencia).

Esta situación jurídica implica que, salvo que existan indicios de abuso, jurisdicción interna reclamada (cf. 6 Ob 128/18v) - en estos

En principio, un argumento concluyente que justifique la jurisdicción suficiente para abrir la jurisdicción del tribunal nacional (por ejemplo, ya hg 3 R 136/18f). Por esta razón, el tribunal de primera instancia fue

La cuestión de la jurisdicción no obliga a iniciar ulteriores procedimientos, por ejemplo entrevistando a testigos, etc. La extensa evidencia del demandante

Las pretensiones jurisdiccionales en primera instancia no son contradictorias ni inconcluyentes. La jurisdicción del demandante (consumidor) en Austria.

De manera abusiva, el procedimiento en primera instancia no puede ser

Este resultado es consistente con el estudio relevante

Jurisprudencia del TJCE, que en su sentencia (fundamental) de 28 de enero de 2015

(C-275/13, Kollassa) resumió las siguientes disposiciones vinculantes para los tribunales nacionales:

Dictamen jurídico, acordado:

El tribunal nacional también está facultado para ejercer sus poderes en caso de controversia relativa a la situación del solicitante.

Las reclamaciones jurisdiccionales no están obligadas a, en la etapa de determinación de la jurisdicción para obtener pruebas. Sin embargo, el tribunal nacional puede su jurisdicción internacional a la luz de toda la información disponible

Examinar las objeciones del demandado, si procede.

Sin embargo, es necesario abordar hechos controvertidos que son relevantes tanto para la cuestión de jurisdicción, así como de la existencia de la reclamación alegada

Es importante realizar un procedimiento probatorio exhaustivo.

(b) Además, la Corte Suprema afirmó recientemente en un caso contra el acusado en su sentencia 8 Ob 71/21f, que trata de una situación muy similar a la

El motivo fue impugnar la competencia internacional del tribunal nacional en virtud del LGVÜ 2007 con un razonamiento detallado, al que se hace referencia; llegó a

Se concluyó que se trataba de un asunto de consumo en el sentido del artículo 15, apartado 1, letra c), de la LGVÜ 2017, incluso si el demandante hubiera contratado a otras personas para el demandado como «comercializador». Esta opinión jurídica también ha sido adoptada por otros Senados de la Corte Suprema (entre otros 4 Ob 5/22x, 5 Ob 223/21m, 6 Ob 146/21w).

2.3 La queja de hecho no podrá ser atendida por estas razones porque:

lo establecido y lo desviado - buscado por la denuncia de hecho -

los hechos tendrían que conducir al mismo resultado jurídico (RS0042386; similar Lovrek en Fasching/Konecny³ § 503 ZPO Rz 71 mwN).

2.4. La desestimación (impugnada) de la excepción de incompetencia se basa en estos Razones para confirmar.

2.5 En cuanto a la excepción de inadmisibilidad del proceso judicial, la

El tribunal de primera instancia señaló en su sentencia que si esta cláusula se celebrara entre los Según el § 879, párrafo 3, del ABGB, esta cláusula es, en cualquier caso, gravemente desventajosa y nula. Además, la objeción basada en la cláusula de arbitraje no se refiere a la inadmisibilidad de un recurso legal, sino a la falta de...
accionabilidad.

(a) El incumplimiento de una cláusula de arbitraje es, según la Corte Suprema, La jurisprudencia no es un obstáculo para el procedimiento que conduce a la desestimación de la acción, pero justifica la objeción sustantiva de falta de procedencia de la reclamación, por lo que el tribunal de primera instancia debe estar de acuerdo en que en este En este contexto ni siquiera se plantea la cuestión de la inadmisibilidad de un recurso judicial (RS0033687; RS0045298; cf. Mayr en Rechberger/Klicka⁵ Vor § 1 JN Rz 13 mwN).

(b) También es correcto el razonamiento alternativo del tribunal de primera instancia, según el cual: La cláusula de arbitraje en el acuerdo Lyconet, si se acuerda, sería nula.
que el Tribunal de Apelación ya había señalado en su decisión preliminar (hg 3 R 212/20y, pág. 49) Esta cláusula tiene por objeto, en todo el contexto de la Los términos y condiciones sólo consideran a los socios contractuales perjudicados de la Demandado de su derecho a exigir la rescisión del contrato nulo, sostener.

2.6. La decisión (impugnada) sobre la defensa procesal de la Por tanto, debe confirmarse la inadmisibilidad del recurso judicial.

3. Al tramitar las alegaciones de apelación presentadas en virtud del motivo de apelación de evaluación jurídica incorrecta, la evaluación jurídica correcta
Valoración del primer tribunal.

3.1. A este respecto, la Sala de Apelaciones adopta la postura jurídica (entre otros, hg 3 R 212/20y) de que Decisiones pertinentes del Tribunal Supremo mencionadas por el primer tribunal en 4 Ob 10/19b y 9 Ob 40/18z (esquema piramidal ilegal) de la jurisprudencia establecida

de la Corte Suprema sobre este tema (RS0102179) y cae en el primer
La decisión de esta cadena jurídica (5 Ob 506/96 = SZ 69/69) encaja perfectamente.
según el cual en un esquema piramidal que opera según el sistema de bola de nieve, ya sea
Las posibilidades de ganar dependen en última instancia del azar, de la
Se debe partir de la base de la nulidad de todo el contrato, opinión que también comparte la
doctrina (p. ej. Graf en Kletecka/Schauer, ABGB-ON1.05 § 879 Rz 45 mwN).

Esta situación jurídica no puede verse afectada por las acciones tomadas por el demandado en comparación con aquella

Los hechos que fundamentaron estas decisiones de la Corte Suprema cambiaron

Los Términos y Condiciones Generales no cambian porque con estos nuevos

Los términos y condiciones, como bien señaló el demandante en primera instancia, sólo

Se intentó camuflar y ocultar el “viejo” modelo de negocio.

El sistema del acusado está orientado a una inyección continua de capital,

sin que los pagos realizados por los llamados miembros o agentes de ventas sean

Con contenido no comprensible

Y, en última instancia, las explicaciones incomprensibles del modelo de negocio son

El acusado intentó reclutar a futuros miembros o a los llamados

para engañar a los “comerciantes independientes de Lyconet” y engañarlos mediante información opaca

Promete dar la impresión de que su modelo de negocio anunciado sería...

tener sentido económico. En el presente caso, la

De acuerdo con los hechos probados, los demandantes nunca han ejercido actividades comerciales.

demandado únicamente con intención de comprar con descuentos (más barato)

y recuperar porcentajes. El modelo de negocio y sus

El demandante entendió las condiciones por razones que eran comprensibles para el Tribunal de Apelación.

Razones para no hacerlo.

Desde el punto de vista del acusado, el Senado opina que una cláusula que

Los pagos realizados por sus “comerciantes” (socios contractuales) no son reembolsados

necesario, porque de lo contrario el efecto bola de nieve que ha creado

y el esquema piramidal como una pura obtención de capital debido a la única

otros servicios rudimentarios y otras ventas en el

En relación con una compra en un plazo relativamente corto debido a la falta de capital

colapsaría. Lo mismo se aplica a la compra de los aún relevantes

“Cupón de descuento”, cuya función y contenido, incluso después de un estudio cuidadoso de la

Los términos y condiciones siguen siendo completamente confusos. Este “cupón” también sirve únicamente

La inyección de capital descrita en los términos y condiciones del demandado
Los contenidos empresariales se desglosan hasta su sustancia de forma consciente.
descripciones opacas y engañosas del modelo de negocio de la
Demandado, lo que al final resulta ser un puro "castillo en el aire". Los contratos,
que el demandado concluye sobre la base de sus términos y condiciones generales,
son, según la opinión jurídica del Tribunal de Apelación, independientemente de la cuestión de
Práctica comercial desleal - inmoral según el § 879 párrafo 1 ABGB.
Teniendo en cuenta todas las circunstancias del contrato incluidas las cláusulas,
Es decir, según lo dicho, una clara violación de derechos jurídicamente protegidos.
intereses de sus socios contractuales y por tanto una inmoralidad según el § 879 párrafo 1
ABGB. Esto constituye una flagrante desventaja unilateral para el respectivo
socio contractual por parte del demandado; una ponderación de intereses demuestra claramente
una grave violación de sus intereses legalmente protegidos (cf. RS0113653; cf. recientemente 4 Ob
142/21t; cf. Bollenberger/P. Bydlinski en KBB6 § 879 ABGB Rz 5 mwN;
Graf aaO § 879 Rz 112 mwN; hg 3 R 212/20y, 3 R 51/20x).

La extensa crítica jurídica contenida en el recurso de casación, que se resume
Los intentos de demostrar que no existe un esquema piramidal se desprenden de estos

Razones que se pasaron por alto.

3.2. Que los términos y condiciones del demandado también son contrarios a
violan el requisito de transparencia del artículo 6, párrafo 3, de la Ley de Protección al Consumidor porque no son claros y
están escritos de manera incomprensible, no es necesario discutirlos más en este caso,
Porque en el caso de que cláusulas contractuales esenciales, como en este caso, sean inmorales,
Todo el contrato es nulo y debe rescindirse de conformidad con el artículo 877 del ABGB, de modo que
Se producen las mismas consecuencias jurídicas (hg 3 R 213/21x; p. ej. 7 Ob 142/07v; cf. Krejci en
Rummel/Lukas, ABGB4 § 879 Rz 514 mwN; cf. OLG Viena 33 R 102/20t).

3.3 De esta situación jurídica se desprende que la queja de hecho se aplica también a la decisión
no tiene relevancia jurídica y puede quedar sin resolver.

4. Por todas estas razones, el recurso de casación desestima la sentencia impugnada, que
se hizo sin error legal, debe ser confirmado.

La decisión sobre las costas se basa en los artículos 41 y 50 del Código de Procedimiento Civil.

Es inadmisibles cualquier impugnación adicional de esta decisión (§ 502 párrafo 2 ZPO, § 519
(ZPO)).

Tribunal Regional de lo Civil de Graz, División 3, Graz, 21 de
septiembre de 2022, Juez del
Tribunal de Apelaciones, Peter Wlattnig,

Copia electrónica según el
artículo 79 de la Ley de Gracia.



angefochtenen Entscheidungsgründe mit einer kurzen Begründung seiner Beurteilung begnügen (§ 500a ZPO).

Die Wiederholung der umfangreichen Behauptungen der Parteien in erster Instanz, sowie der Feststellungen (Außerstreitstellungen) und der rechtlichen Beurteilung im angefochtenen Urteil ist aus diesem Grund entbehrlich.

Mit dem angefochtenen **Urteil** verwarf das Erstgericht die Prozesseinreden a) der fehlenden internationalen und örtlichen Zuständigkeit des Bezirksgerichtes Weiz und b) der Unzulässigkeit des Rechtswegs und gab der Klage statt. Es traf im Urteil, Seiten 10 bis 13, seine teils angefochtenen Feststellungen, auf die zur Vermeidung von Wiederholungen zunächst verwiesen wird.

Seine internationale Zuständigkeit bejahte das Erstgericht mit der zusammengefassten Begründung, dass der Beklagten der Beweis, dass sie mit dem Kläger einen ausschließlichen Gerichtsstand (Buchs in der Schweiz) vereinbart hätte, nicht gelungen sei. Was die von der Beklagten behauptete Schlichtungsklausel anlange, habe die Beklagte auch nicht beweisen können, dass sie diese Klausel mit dem Kläger vereinbart hätte. Im Übrigen sei der Kläger Verbraucher und daher der Verbrauchergerichtsstand des Art 16 Abs 1 LGVÜ gegeben. Die in der Lyconet-Vereinbarung 2014 enthaltene Schlichtungsklausel sei überdies gemäß § 879 Abs 3 ABGB jedenfalls gröblich benachteiligend, unbestimmt und undeutlich, sodass sie - selbst wenn sie zwischen den Parteien vereinbart worden wäre - nichtig wäre. Eine obligatorische Schlichtungsklausel würde ferner nur zur Abweisung des Klagebegehrens mangels Klagbarkeit führen. Daher seien die Prozesseinreden der Beklagten zu verwerfen.

In der Sache wies das Erstgericht auf die höchstgerichtlichen Entscheidungen 4 Ob 10/19b und 9 Ob 40/18z hin, wonach das Geschäftsmodell der Beklagten bereits in mehreren höchstgerichtlichen Entscheidungen als verbotenes Schneeballsystem iSd Z 14 des Anhangs zu § 12 UWG gewertet worden sei. Das Umbenennen der „Gutscheine“ in „Rabattgutscheine“ oder „Vouchers“ würde an der Beurteilung als verbotenes Schneeballsystem nichts ändern; das Geschäftsmodell der Beklagten sei gleich geblieben. Das Vertragsverhältnis zwischen den Streitteilen sei daher gemäß § 879 Abs 1 ABGB iVm § 2 UWG Anhang Z 14 nichtig. Nach § 877 ABGB habe die Beklagte die vom Kläger geleisteten Anzahlungen abzüglich der Auszahlungen und der Umbuchungen zurückzuerstatten.

(Nur) gegen Zuspruch von EUR 1.050,00 samt Zinsen richtet sich die eine Mängel-, Tatsachen- und Rechtsrüge ausführenden **Berufung** der Beklagten, mit der sie die Abänderung des angefochtenen Urteils dahin beantragt, ihrer Unzuständigkeitseinrede im Umfang von EUR 1.050,00 samt Zinsen stattzugeben und das Klagebegehren in dieser Höhe zurückzuweisen; hilfsweise wird die Abänderung beantragt, die Klage im Umfang von EUR 1.050,00 samt Zinsen wegen der fehlenden Klagbarkeit zurück- oder abzuweisen; hilfsweise wird beantragt das angefochtene Urteil dahin abzuändern, das Mehrbegehren von EUR 1.050,00 samt Anhang abzuweisen.

Die Berufung der Beklagten lässt demnach einen Zuspruch von EUR 2.525,75 samt Zinsen unbekämpft, welcher (gemeinsam mit der Verwerfung der Prozesseinreden in diesem Umfang) aus diesem Grund in Rechtskraft erwuchs.

Der Kläger beantragt in seiner Rechtsmittelbeantwortung, der Berufung nicht Folge zu geben.

Die Berufung, über die gemäß § 480 Abs 1 ZPO in einer nicht öffentlichen Sitzung entschieden werden konnte, **ist nicht berechtigt**.

1.1. Die Mängelrüge betrifft die Entscheidung über die Prozesseinrede der fehlenden internationalen Zuständigkeit und jene in der Sache. Die Beklagte vermisst nämlich die von ihr zu beiden Themen beantragte Einvernahme des Zeugen Christopher Thomson, sodass nach ihren Behauptungen relevante Stoffsammlungsmängel (§ 496 ZPO) vorliegen würden.

1.2. Die gerügte Mangelhaftigkeit des Verfahrens erster Instanz liegt nicht vor:

Die Beklagte lässt ihre eigene prozessuale Disposition unbeachtet, wonach sie in der mündlichen Verhandlung am 07.04.2021 auf die Einvernahme des Geschäftsführers der Beklagten, Christopher Thomson, vor dem Bezirksgericht Weiz ausdrücklich verzichtete und sich mit einer Verlesung seiner Aussage in einem Parallelprozess einverstanden erklärte (ON 18, Seite 3). Das Protokoll über seine Einvernahme wurde in dieser Verhandlung von der Beklagten als Beilage ./16 vorgelegt und auch verlesen, sodass der behauptete Fehler des Gerichts nicht erkennbar ist.

2.1. Auch die Tatsachenrüge betrifft die Entscheidung über die Zuständigkeit und jene in der Sache. Die Beklagte ficht nämlich die im Urteil, Seite 12, getroffenen

Negativfeststellungen an, wonach (zusammengefasst)

nicht festgestellt werden konnte, dass der Kläger eine Gerichtsstandsvereinbarung mit dem Schweizer Gericht oder eine Schlichtungsklausel vereinbart hätte und auch nicht, dass der Kläger die Lyconet-Vereinbarung 2014 samt der darin enthaltenen Gerichtsstandsvereinbarung mit der Beklagten vereinbarte; auch konnte nicht festgestellt werden, dass der Kläger mit der Beklagten Zusatzbedingungen für Rabattgutscheine vereinbarte oder sich einer obligatorischen Schlichtungsklausel mit der Beklagten unterwarf.

Die Beklagte will mit ihrer Tatsachenrüge darauf hinaus, dass zu allen von ihr behaupteten Vereinbarungen mit dem Kläger positive Tatsachenfeststellungen getroffen werden.

2.2. Die Tatsachenrüge ist nicht von rechtlicher Bedeutung, weil auch dann, wenn zu den genannten Punkten (Gerichtsstandsvereinbarung; Vereinbarung einer Schlichtungsklausel, Vereinbarung der Lyconet-Vereinbarung 2014) positive Tatsachenfeststellungen gemäß den Behauptungen der Beklagten vorliegen würden, aus verschiedenen Gründen keine Änderung der rechtlichen Beurteilung sowohl bei der Entscheidung über die Prozesseinreden (siehe sogleich), als auch in der Sache selbst (siehe Punkt 3.) eintreten würde:

(a) Wie der erkennende Berufungssenat auch in Sachen der Beklagten bereits mehrmals aussprach (ua hg 3 R 212/20y) hängt das Bejahen oder Verneinen des internationalen Verbrauchergerichtsstands und damit die Frage der Zuständigkeit des angerufenen Gerichts auch davon ab, ob der Kläger bei Abschluss des Vertrags mit der Beklagten als Verbraucher oder als Unternehmer anzusehen ist. Diese Eigenschaft betrifft aber nach der Klagserzählung auch den geltend gemachten materiell-rechtlichen Anspruch. Im Einklang mit europarechtlichen Rechtslage vertritt der OGH die ständige Rechtsansicht, dass in diesem Fall für die Prüfung der Zuständigkeit die Schlüssigkeit des Klagevorbringens ausreichen muss, um diese Prüfung nicht mit einer weitgehenden Sachprüfung zu belasten (RS0116404). Wenn daher die Zuständigkeit des angerufenen Gerichts von diesen sogenannten doppelrelevanten Tatsachen abhängt, reicht eine Schlüssigkeitsprüfung des klägerischen Vorbringens aus, um nicht bereits die Zuständigkeitsprüfung mit einer Sachprüfung zu überlasten. Dies ist geboten, weil die Zuständigkeit unabhängig von der erst im Verfahren selbst zu prüfenden Begründetheit des Anspruchs beurteilt können werden muss (ua 6 Ob 128/18v mwN aus Literatur und Rechtsprechung). Aus

dieser Rechtslage folgt, dass - sofern sich nicht Hinweise auf einen missbräuchlich geltend gemachten inländischen Gerichtsstand ergeben (vgl 6 Ob 128/18v) - in diesen Fällen grundsätzlich ein schlüssiges gerichtsstands begründendes Vorbringen ausreicht, um die Zuständigkeit des nationalen Gerichtes zu eröffnen (zB bereits hg 3 R 136/18f). Aus diesem Grund war das Erstgericht betreffend die Zuständigkeitsfrage gar nicht verpflichtet, darüber ein weiteres Beweisverfahren, etwa durch Einvernahme von Zeugen usw, durchzuführen. Die umfangreichen klägerischen Zuständigkeitsbehauptungen in erster Instanz sind weder widersprüchlich, noch sonst unschlüssig. Dass der Kläger den (Verbraucher-)Gerichtsstand in Österreich missbräuchlich in Anspruch nimmt, kann dem Verfahren in erster Instanz überhaupt nicht entnommen werden. Dieses Ergebnis stimmt mit der einschlägigen Rechtsprechung des EuGH, der in seinem (grundlegenden) Urteil vom 28.01.2015 (C-275/13, Kollassa) zusammengefasst folgende für die nationalen Gerichte bindende Rechtsansicht vertrat, überein:

Das nationale Gericht ist auch im Fall des Bestreitens der klägerischen Zuständigkeitsbehauptungen nicht verpflichtet, im Stadium der Ermittlung der Zuständigkeit ein Beweisverfahren durchzuführen. Das nationale Gericht kann aber seine internationale Zuständigkeit im Lichte aller ihm vorliegenden Informationen prüfen, wozu gegebenenfalls auch die Einwände des Beklagten gehören. Nicht erforderlich ist es aber, zu strittigen Tatsachen, die sowohl für die Frage der Zuständigkeit, als auch für das Bestehen des geltend gemachten Anspruchs von Relevanz sind, ein umfassendes Beweisverfahren durchzuführen.

(b) Darüber hinaus bejahte der OGH jüngst in einer Rechtssache gegen die Beklagte in seiner Entscheidung 8 Ob 71/21f, welcher ein ganz vergleichbarer Sachverhalt zu Grunde lag, die internationale Zuständigkeit des inländischen Gerichts nach dem LGVÜ 2007 mit einer ausführlichen Begründung, auf die verwiesen wird; er gelangte zusammengefasst zum Ergebnis, dass es sich um eine Verbrauchersache iSd Art 15 Abs 1 lit c LGVÜ 2017 handle, selbst wenn der dortige Kläger als „Marketer“ andere Personen für die Beklagte angeworben hätte. Dieser Rechtsansicht haben sich auch andere Senate des OGH angeschlossen (ua 4 Ob 5/22x, 5 Ob 223/21m, 6 Ob 146/21w).

2.3. Die Erledigung der Tatsachenrüge kann aus diesen Gründen unterbleiben, weil der festgestellte und der davon abweichende - von der Tatsachenrüge angestrebte -

Sachverhalt zum gleichen rechtlichen Ergebnis führen müssten (RS0042386; ähnlich Lovrek in Fasching/Konecny³ § 503 ZPO Rz 71 mwN).

2.4. Die (angefochtene) Verwerfung der Unzuständigkeitseinrede ist aus diesen Gründen zu bestätigen.

2.5. Was die Einrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs anlangt, wies das Erstgericht im Urteil darauf hin, dass für den Fall, dass diese Klausel zwischen den Streitparteien vereinbart worden wäre, diese nach § 879 Abs 3 ABGB jedenfalls gröblich benachteiligend und nichtig sei. Überdies betreffe der auf die Schlichtungsklausel beruhende Einwand nicht die Unzulässigkeit des Rechtswegs, sondern eine fehlende Klagbarkeit.

(a) Die Nichteinhaltung einer Schlichtungsklausel ist nach der höchstgerichtlichen Rechtsprechung kein zur Klagszurückweisung führendes Prozesshindernis, sondern begründet den materiell-rechtlichen Einwand der mangelnden Klagbarkeit des Anspruchs, sodass dem Erstgericht beizupflichten ist, dass sich in diesem Zusammenhang die Frage der Unzulässigkeit des Rechtswegs gar nicht stellt (RS0033687; RS0045298; vgl Mayr in Rechberger/Klicka⁵ Vor § 1 JN Rz 13 mwN).

(b) Zutreffend ist auch die Hilfsbegründung des Erstgerichtes, dass diese Schlichtungsklausel in der Lyconet-Vereinbarung – wenn vereinbart - nichtig wäre, worauf das Berufungsgericht bereits in seiner Vorentscheidung (hg 3 R 212/20y, Seite 49) ausdrücklich hinwies. Diese Klausel bezweckt im gesamten Zusammenhang der Geschäftsbedingungen betrachtet nämlich nur, geschädigte Vertragspartner der Beklagten von ihrem Recht, die Rückabwicklung des nichtigen Vertrags zu begehren, abzuhalten.

2.6. Auch die (angefochtene) Entscheidung über die Prozesseinrede der Unzulässigkeit des Rechtswegs ist sohin zu bestätigen.

3. Auch in Behandlung des Berufungsvortrags unter dem Rechtsmittelgrund der unrichtigen rechtlichen Beurteilung wird zunächst auf die zutreffende rechtliche Beurteilung des Erstgerichtes verwiesen.

3.1. Dazu vertritt der Berufungssenat die Rechtsansicht (ua hg 3 R 212/20y), dass die vom Erstgericht erwähnten einschlägigen Entscheidungen des OGH zu 4 Ob 10/19b und 9 Ob 40/18z (unzulässiges Schneeballsystem) der ständigen Rechtsprechung

des OGH zu diesem Thema entspricht (RS0102179) und sich in die erste Entscheidung dieser Rechtssatzkette (5 Ob 506/96 = SZ 69/99) nahtlos einfügt, wonach bei einem nach dem Schneeballsystem funktionierenden Pyramidenspiel – ob Gewinnchancen erzielt werden können, hängt letztlich vom Zufall ab – von der Nichtigkeit des gesamten Vertrags auszugehen ist, welche Ansicht auch von der Lehre geteilt wird (zB Graf in Kletecka/Schauer, ABGB-ON^{1.05} § 879 Rz 45 mwN).

An dieser Rechtslage vermögen auch die von der Beklagten im Vergleich zu jenem Sachverhalt, der diesen Entscheidungen des OGH zu Grunde lag, geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts zu ändern, weil mit diesen neuen Geschäftsbedingungen, wie der Kläger in erster Instanz zu Recht betonte, nur versucht wurde, das „alte“ Geschäftsmodell zu tarnen und zu verschleiern. Weiterhin ist das System der Beklagten auf eine laufende Zuführung von Kapital ausgerichtet, ohne dass den Zahlungen durch die sogenannten Mitglieder oder Vertriebsmittler eine nennenswerte Gegenleistung gegenüber steht. Mit inhaltlich nicht nachvollziehbaren und letztlich unverständlichen Erklärungen zum Geschäftsmodell wird von der Beklagten der Versuch unternommen, künftige Mitglieder oder sogenannte „unabhängige Lyconet-Marketer“ in die Irre zu führen und ihnen durch undurchsichtige Versprechungen den Eindruck zu vermitteln, ihr beworbenes Geschäftsmodell würde einen wirtschaftlichen Sinn ergeben. Auch im hier vorliegenden Fall kam der gemäß dem festgestellten Sachverhalt nie unternehmerisch tätig gewesene Kläger mit der Beklagten nur mit der Absicht in Kontakt, mit Rabatten (günstiger) einkaufen zu können und Prozente zurückzubekommen. Das Geschäftsmodell und dessen Bedingungen verstand der Kläger aus für das Berufungsgericht nachvollziehbaren Gründen nicht.

Aus der Sicht der Beklagten ist nach der Ansicht des Senats eine Klausel, dass die von ihren „Marketern“ (Vertragspartnern) geleisteten Zahlungen nicht zurückerstattet werden, zwingend notwendig, weil andernfalls das von ihr aufgezugene Schneeball- und Pyramidensystem als eine reine Beschaffung von Kapital aufgrund der nur rudimentär vorhandenen anderen Dienstleistungen und sonstigen Umsätze im Zusammenhang mit einem Einkauf in relativ kurzer Zeit mangels Kapital in sich zusammenbrechen würde. Dasselbe gilt auch für den Kauf des hier noch relevanten „Rabattgutscheins“, dessen Funktion und Inhalt auch nach genauem Studium der Geschäftsbedingungen vollkommen unklar bleibt. Auch dieser „Gutschein“ dient nur

der Kapitalzufuhr. Die in den Geschäftsbedingungen der Beklagten beschriebenen Geschäftsinhalte sind – auf die Substanz heruntergebrochen - tatsächlich nur bewusst undurchsichtige und irreführende Beschreibungen des Geschäftsmodells der Beklagten, welches sich im Ergebnis als ein reines „Luftschloss“ erweist. Die Verträge, die die Beklagte auf Grundlage ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen abschließt, sind nach der Rechtsansicht des Berufungsgerichtes - unabhängig von der Frage der unlauteren Geschäftspraxis - sittenwidrig gemäß § 879 Abs 1 ABGB. Unter Berücksichtigung aller Umstände des Vertrags samt dem Klauselwerk ergibt sich nämlich nach dem Gesagten klar eine grobe Verletzung rechtlich geschützter Interessen ihrer Vertragspartner und damit eine Sittenwidrigkeit nach § 879 Abs 1 ABGB. Hier liegt nämlich eine krasse einseitige Benachteiligung des jeweiligen Vertragspartners durch die Beklagte vor; eine Interessenabwägung ergibt eindeutig eine grobe Verletzung seiner rechtlich geschützten Interessen (vgl RS0113653; vgl jüngst 4 Ob 142/21t; vgl Bollenberger/P. Bydlinski in KBB⁶ § 879 ABGB Rz 5 mwN; Graf aaO § 879 Rz 112 mwN; hg 3 R 212/20y, 3 R 51/20x).

Die umfangreiche rechtliche Kritik in der Berufung, welche zusammengefasst darzulegen versucht, dass hier kein Schneeballsystem vorliege, ist aus diesen Gründen verfehlt.

3.2. Dass die Klauseln/Geschäftsbedingungen der Beklagten darüber hinaus gegen das Transparenzgebot des § 6 Abs 3 KSchG verstoßen, weil sie unklar und unverständlich verfasst sind, braucht im vorliegenden Fall nicht weiter vertieft werden, weil für den Fall, dass wesentliche Vertragsklauseln, wie hier, sittenwidrig sind, der gesamte Vertrag nichtig und gemäß § 877 ABGB rückabzuwickeln ist, sodass dieselben Rechtsfolgen eintreten (hg 3 R 213/21x; zB 7 Ob 142/07v; vgl Krejci in Rummel/Lukas, ABGB⁴ § 879 Rz 514 mwN; vgl OLG Wien 33 R 102/20t).

3.3. Aus dieser Rechtslage folgt, dass die Tatsachenrüge auch für die Entscheidung in der Sache ohne rechtliche Relevanz ist und unerledigt bleiben kann.

4. Aus all diesen Gründen bleibt die Berufung erfolglos. Das angefochtene Urteil, das frei von Rechtsirrtum erging, ist zu bestätigen.

Die Kostenentscheidung gründet sich auf die §§ 41, 50 ZPO.

Eine weitere Anfechtung dieser Entscheidung ist unzulässig (§ 502 Abs 2 ZPO, § 519 ZPO).

Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz, Abteilung 3

Graz, 21. September 2022

Hofrat Mag. Peter Wlattnig, Richter

Elektronische Ausfertigung

gemäß § 79 GOG